



Neamp

Universidad, memorias y derechos humanos. Una breve etnografía complutense.

Ariel Jerez*

Resumen

Desde una perspectiva crítica respecto al legado cultural franquista, este artículo analiza la situación de los derechos humanos y las políticas de memoria en España. Con la crisis del caso de juez Garzón como telón de fondo, se desarrolla una breve incursión etnográfica en una de las mayores facultades de ciencias sociales (la de la Universidad Complutense de Madrid). El autor aborda la cuestión señalando algunos aspectos de la situación institucional marginal del pensamiento crítico; de sus consecuencias sobre las agendas de investigación y ofertas formativas; algunos aspectos generacionales que pesan sobre la vida cotidiana.

Abstract

From a critical perspective of the Francoist cultural legacy, this article analyses the human rights situation and the politics of memory in Spain. Against the backdrop of the “Judge Garzón Case”, a brief ethnographic incursion developed in one of the largest social sciences faculties, in the Universidad Complutense de Madrid. The author deals with some problematic aspects such as the marginal situation of critical thinking; of their consequences on the research and formation agendas and some generational aspects that influence everyday life.

1. Introducción.

En la universidad española, los menguados sectores críticos no hemos tenido fuerza para modular una pretendida perspectiva progresista en exceso *light*, conformista y autocomplaciente, forjada en un proceso de transición a la democracia considerada “modélica”. La intensa modernización sociocultural desatada tras soltar el lastre de una dictadura que afectó a tres generaciones explica, en buena medida, que las elites hayan quedado presas de sus propias estrategias propagandísticas.

Sin embargo, cada día que avanza la crisis –ineludiblemente económica, pero crecientemente política- se abre una perspectiva evaluativa donde queda en evidencia que institucionalmente no se ha realizado el incómodo esfuerzo de valorar los silencios y omisiones en relación al pasado. Sobre todo, cómo una vez pasado los tan discutidos periodos de “transición” y “consolidación” –según la formulaciones politológicas al uso- los actores democráticos pasaban a utilizar los legados –tangibles e intangibles del franquismo- para sus propias estrategias de poder. Como es obvio, cuestión más polémica para las izquierdas, dado el contenido ético que se le presupone a sus programas políticos.

El pensamiento crítico forjado en el ámbito universitario ha contribuido, o no, como en el caso español, a reelaborar nuestra –siempre- traumática experiencia compartida. Junto a otros ámbitos de producción cultural como la literatura o las distintas vertientes de producción

* Profesor de Ciencia Política y colaborador en la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo. Desempeña el cargo de Vicedecano de Estudiantes, Tecnologías y Extensión Cultural en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.



Neamp

artística, desde las ciencias sociales críticas se contribuye a modular las narrativas que orientan los imaginarios colectivos que a lo largo de la modernidad han construido los estados nación “realmente existentes”. Muchas veces apoyándose en el pensamiento religioso, con distintos componentes emancipadores, el espacio público e interestatal sufre un constante (re)trazado de sus fronteras internas y externas, al calor de las luchas de los de abajo contra la explotación y por la democratización. Con similar sentido pedagógico, Mario Benedetti nos planteaba implicación cuando verseaba “todo es según el dolor con que se mira” y Walter Benjamín nos reclamaba distanciamiento en el análisis al recordarnos que “no hay documento de cultura que no sea también documento de barbarie” (Chirbes, 2005).

En términos comparados, por ejemplo con América latina, la universidad española ha aportado poco -con honrosas excepciones individuales- a pensar histórica y antropológicamente; más bien al contrario y en buena medida, ha sido cómplice activa en una estrategia de silenciamiento programada desde el ámbito político. Recién ahora, al calor del movimiento de la memoria impulsado por la generación de los nietos de los republicanos, vemos cómo lentamente empiezan a producirse nuevas articulaciones sociales y académicas, que con muchas dificultades llevan a una nueva generación de universitarios a revisar lo que puede leerse como una transición inmodélica al calor de la nueva cultura de derechos humanos (Navarro, 2002). No podemos olvidar que el inicio del proceso de destitución de Baltasar Garzón en abril de 2010, acusado de prevaricación por haber intentado investigar la causa presentada en la Audiencia Nacional por las asociaciones de familiares y víctimas del franquismo, interrogó a la sociedad española. Sin duda el magistrado de mayor reconocimiento nacional e internacional, por su lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y los derechos humanos, era encausado por magistrados abiertamente ultraderechistas que aceptaban en la querrela a Falange Española, el partido único del franquismo, ante la total pasividad de las fuerzas políticas y la institucionalidad democrática.

En las líneas que siguen, me planteo realizar una suerte de breve incursión etnográfica en la Universidad Complutense, en tanto alumno, profesor e investigador comprometido en la última década con el acompañamiento de los movimientos sociales madrileños. Evidentemente es una aproximación sesgada y crítica, no sistemática, que tiene la voluntad de apuntar algunas dinámicas de nuestras culturas relacionales a la luz de una ineludible “observación participante” en distintos espacios universitarios –desde aulas a rectorados, pasando por departamentos, decanatos y en servicios auxiliares como bibliotecas y laboratorios-. Teniendo presente la noción de campo (Bourdieu, 2008) en el espacio universitario, atendemos como creencias, prácticas y lenguajes corren distinta suerte en el proceso de institucionalización, generando diferentes capacidades de significación y de incidencia, que llevan a que en las diversas esferas públicas se desarrolle más o menos capacidades deliberativas. Para esto nos situamos, más concretamente, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (FCPS en adelante) un núcleo clave de la producción académica y discursiva legitimadora de los pactos de la llamada Transición, donde planteamos tres entradas: la situación teórica marginal del pensamiento crítico; las agendas de investigación y una perspectiva generacional.

1. Pensamiento crítico, teoría y política. La represión intelectual fue una constante del régimen franquista, iniciada tempranamente por el “¡viva la muerte!” y “¡muera la inteligencia!” proferido por el general Millán Astral. El rector, Miguel de Unamuno –hasta el momento partidario del llamado “movimiento nacional”- inauguraba la larga resistencia universitaria con la célebre sentencia “venceréis, pero no convenceréis” (Rojas, 1995). El



Neamp

desplazamiento crítico de la universidad fue estratégico, como dejó claro José Ibáñez Martín en 1940 –ministro franquista que todavía hoy conserva avenida en el campus universitario complutense-:

“era vital para nuestra cultura amputar con energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas era la del profesorado” (citado en Otero Carvajal, 2001).

A la represión (entre centenares de víctimas universitarias, cabe destacar que tres rectores fueron fusilados), se sumarían las largas “depuraciones” de posguerra en lo que otro falangista con “descargo de conciencia” (Lain Entralgo, 1976) llamaría el “atroz desmoche” (por ejemplo, la entonces Universidad de Madrid, hoy Complutense, perdería casi el 35% de su profesorado). Destrucción de la ciencia que se terminaría de complementar con las llamadas “oposiciones patrióticas”, que incorporarían a los falangistas por la vía de méritos políticos a la vida universitaria a lo largo de las casi cuatro décadas del régimen (Carreras Ares y Ruiz Carnicer, 1991; Ruiz Carnicer, Alvarez Cobelas, 2004; Claret Miranda, 2006; Otero Carvajal, 2006).

Desde las primeras protestas de 1956, el espacio universitario se iría configurando como clave para la movilización, junto al movimiento obrero, que incidiría en la creciente pérdida de legitimidad de la dictadura (sobre todo desde el asesinato del estudiante Enrique Ruano a manos de la Brigada Político-Social, la policía política en 1969). La consigna “obreros y estudiantes” encerraba un potencial de movilización que preocupaba al régimen, que desarrolló estrategias de violencia selectiva policial amparada por grupos ultraderechistas, que le permitieron al ministro franquista Manuel Fraga (hoy intocado padre constitucional de la democracia) decir “la calle es mía”: los muertos obreros y estudiantiles a manos de fuerzas de seguridad y grupos derechistas llegaron a hasta finales de los setenta a pesar de que el dictador había muerto en 1975 (Sánchez Soler, 2010; Ruiz Huerta Carbonell, 2009. Con Gallego (2008), pensamos que el mito de la transición pacífica, consensuada y ejemplar es falso: la dinámica desatada por estos movimientos, a mediados de 1976, llevaron a un grado de desafío al régimen, que abortaron el proyecto continuista de los sectores “duros” del régimen que apostaban por una “democracia a la turca” –situación previamente facilitada por el asesinato del almirante Carrero Blanco en 1973, hombre de confianza de Franco-.

En la Transición la reforma universitaria se limitó a aspectos que podríamos considerar administrativos, y estas elites universitarias y sus planes de estudios, si bien ya conviviendo con espacios de resistencia intelectual que se habían ido abriendo desde las primeras protestas estudiantiles de 1956, tuvieron continuidad en democracia. La generación de profesores que participaron como movimiento estudiantil en la resistencia antifranquista vivirán un brusco cambio con el pragmatismo que las fuerzas políticas –incluidos PCE y PSOE- imprimen a los elitistas pactos de la Transición. Con distinto grado de conciencia, a partir de ese momento mayoritariamente difunden los marcos consensuales que legitimarían dichos pactos, desentendiéndose de los legados tangibles e intangibles del franquismo (Ugarte, 2005).

Lo que implicó a lo largo de la neoliberal década de los ochenta un proceso de distanciamiento, aislamiento y marginación, muchas veces estigmatizador, de las perspectivas críticas de otros muchos profesores y estudiantes que intentaron cuestionarlos. Una primer



Neamp

momento fue la barrera obstaculizadora para los que deberían haber vuelto del exilio, entre los que había pensadores críticos fundamentales, surgía de una coalición opaca de profesores franquistas y los demócratas, que no querían tener competidores en sus prometedoras carreras académicas (Morán, 1991). La “generación de la democracia” –los que en las encuestas de opinión aparecen en los grupos de edad de los nacidos entre 1974 y 1990- se ha quedado en buena medida huérfana de maestros críticos, que ese estudiantado/profesorado antifranquista pudo disfrutar incluso en la clandestinidad. El control sobre los dispositivos de reproducción académica y las inercias de una cultura institucional autoritaria, que muchos de estos profesores comprometidos con los pactos empezaban a manejar estratégicamente, fue amplio: la “cultura funcionarial”, marcada por la jerarquía y antigüedad, presente en la elección de cargos académicos, en la selección de candidatos a nuevas plazas, en elección de asignaturas y manuales de referencia, en los comités de evaluación de proyectos de investigación, publicaciones, congresos; actividades extraacadémicas como ciclos de conferencias, comisariado de exposiciones, premios y cargos institucionales, vida sindical y política universitaria, etc.

En estas circunstancias, en la micropolítica universitaria tomaba forma el “pacto de silencio” que muchos catedráticos dicen desconocer con el cuestionable argumento de que en este país “todo el mundo podía publicar lo que quería”. Tras el oscuro golpe de estado de 1981, todo el mundo con “sentido común” había terminado de entender que era necesario alejarse de un pasado marcado por la tragedia y que, responsablemente, había que enterrarlo para no correr riesgos y para evitar “reabrir heridas”. Una década después, el desplome del socialismo real y la consecuente crisis ideológica del marxismo de Estado y de los imaginarios de transformación social venían a reforzar este control marginador del pensamiento crítico, y poner las bases de lo que sería posteriormente el pensamiento único, hasta hoy en buena medida hegemónico en las ciencias sociales.

De esta manera, la universidad parece haberse permitido, durante más de tres décadas de democracia, no pensar –es decir, ignorar- las consecuencias del peso cultural y sociológico del franquismo en los distintos planos y niveles de la realidad de nuestra joven democracia. Tampoco ha querido valorar cómo pesan estas consecuencias en los marcos teóricos con los que investigamos, en los contenidos que enseñamos y en cómo nos relacionamos con el estudiantado. Sin duda son déficit de información, acción y reflexión que también es parte constitutiva de la crisis multidimensional que atravesamos, que trenzan aspectos intelectuales, educativos y culturales relevantes desde el punto de vista de una resolución ciudadanista y democrática, por lo que desde el campo progresista estamos abocados a atenderlos.

El pensamiento crítico es radical, al analizar las dinámicas sociales, porque aborda la capacidad configuradora de las diferentes instancias de poder social en su permanente disputa por la orientación de los campos por los que discurre el orden sociopolítico. Mantiene una doble perspectiva, por un lado el pacto cultural por una racionalidad democrática y emancipadora, y por otro, el análisis de hegemonías del poder entre las distintas articulaciones micro y macro del poder social –entre ellas, las que se producen al interior de la universidad, desde sus aulas a sus rectorados, y su tarea de “puente hacia la sociedad”, esa acción institucional tan poco desarrollada en nuestro país que es la “extensión universitaria”. Es decir, los que disfrutamos del pensamiento crítico en nuestra vida apostamos por creer en la “democracia”, el “estado del derecho”, la “justicia”, el “socialismo”, la “igualdad”, la “libertad”, la “excelencia académica”, la “innovación pedagógica” y tantas otras cuestiones en las que nos apoyamos y trabajamos para emanciparnos, pero sin dejar de (re)conocer e



Neamp

intentar incidir en las dinámicas de poder sobre las que descansan, buscando regular sus estrategias perversas en un contexto crecientemente competitivo, que tiende a vaciar de contenido estas nobles palabras.

La capacidad de comprender y trabajar sobre estos procesos simbólicos y discursivos de la realidad social tiene una evidente dimensión teórica, donde la racionalidad interna de las diversas narrativas amplía, o no, la capacidad explicativa sobre fenómenos y procesos sociales siempre complejos. Parcelamos, aprehendemos, seleccionamos campos teóricos, perspectivas metodológicas y objetos de estudio y, como servidores públicos dedicados a la ciencia, a la explicación que construimos se le presupone un interés público de importancia para el conjunto de la sociedad. Dependiendo de la ósmosis de la universidad con su entorno social, muchas veces el conocimiento científico –sobre todo en ciencias sociales- puede quedar preso de intereses de las instituciones que pagan los estudios y de los intereses profesionales que los realizan. El pensamiento crítico institucionalmente incardinado y conectado a las agendas de los movimientos sociales es la única vacuna contra este peligro. De ahí la necesidad de seguir exigiendo pluralismo teórico y metodológico, hoy amenazado por los criterios mercantilizadores que quieren imponerse también en la universidad.

Desde este ángulo se puede observar no sólo su debilidad institucional, sino incluso la escasa circulación de autores clave del marxismo y de otras escuelas críticas normalizadas en otras latitudes universitarias. Por ejemplo, en comparación con facultades de ciencias sociales latinoamericanas o europeas, es llamativo el amplio desconocimiento de clásicos como Antonio Gramsci, Michel Foucault o los diversos autores que en distintos campos han problematizado el “giro semiótico” que ha marcado el desarrollo teórico crítico en los estudios culturales, postcoloniales, de género y los sistemas mundo. También el escaso interés suscitado por el instrumental metodológico aportado por la sociología histórica para abordar la compleja causalidad múltiple que gravita sobre los cambios institucionales y políticos en el largo plazo de la construcción estatal –la deseada democracia como proceso, conflictivo y siempre inacabado, de domesticación del capital y la coerción en competición interestatal -. En términos institucionales los agrupamientos de investigadores en líneas críticas son jóvenes, escasos y limitados, con recursos irrisorios si los comparamos con los proyectos *mainstream*, con contados “puentes generacionales” y con agendas de investigación con baja politización o de politización sectorializada (cómo en el caso de los estudios de género, sexualidad o cibercultura).

Por el contrario, podemos constatar el incontestado predominio teórico de escuelas convencionales de matriz liberal-funcionalista, donde dominan desarrollos pobres que tienden a emplazarse como “argumentos de autoridad” académica con la importación aproblemática de debates transnacionalizados –como, por ejemplo en las ciencias políticas, comparativismo en perspectiva sistémica, democracia procedimental, gobernanza, nueva gestión pública, inodoros estudios literarios-. Podríamos llamar la atención sobre la enorme gravitación que tuvieron los trabajos de Juan Linz en la recién creada politología española, con sus maniqueas tesis sobre totalitarismo y autoritarismo, utilizadas posteriormente por el Departamento de Estado, como tan acertadamente ha puesto en evidencia el profesor Vicenç Navarro (2009). La hegemonía incontestada de estos enfoques, sin duda, se debe a su articulación con el sistema estatal -y privado corporativo- de producción de información sociológica y de opinión pública. Un corpus de datos que, ante la ausencia de pensamiento crítico y la consiguiente capacidad de experimentación innovadora, mantiene graves deficiencias y asimetrías –sobre



Neamp

todo para explicar las dinámicas crecientemente sorprendidas en una fase de crisis como la actual -.

Estas coaliciones de intereses profesionales e ideológicos, de manera más o menos activa, potencian la compartimentación temática y teórica de los departamentos, donde se premian las perspectivas afines y se marginan las críticas. Lastrando así la innovación transdisciplinar que debería cruzar con toda naturalidad campos como la sociología, la ciencia política y la antropología, incluso la economía, la filosofía, las relaciones internacionales y el derecho. No puede sorprender por tanto una producción científica escasamente innovadora y creativa, como insisten en señalar diversas evaluaciones internacionales (. Como hemos tenido oportunidad de comprobar en las universidades extranjeras, el progreso académico exige dialogar y buscar complementariedades en el campo de las ideas, premiando institucionalmente el pluralismo teórico-metodológico.

Y no se puede perder de vista también que estos comportamientos confunden gravemente el debate público. Porque en la medida en que los “objeto de estudio” se tensionan por las demandas sociales, politizándose, parece romperse la torre de cristal del científico. Sólo ya puede defender su autoridad –que en esta situación no puede ser más que de manera autoritaria- reclamando el monopolio del conocimiento profesional y negándose a reconocer al aportado por otros actores, acusados de no científicos, pero que legítimamente quieren intervenir en un debate que es también intelectual y político. En el caso de cómo encajar las memorias colectivas del pasado y la impunidad de fascismo español, este debate es agrio y produce sorpresas.

2. Una agenda de investigación desde la memoria y contra la impunidad

El sábado 24 de abril de 2010 más de 60.000 personas participaban en una primera gran manifestación pública impulsada por la “generación de los nietos” de las víctimas republicanas, que se convocó bajo el lema “*Contra la impunidad. Solidaridad con las víctimas del franquismo*”. A pesar de ser la primera convocatoria de movilización pública a nivel estatal, era producto del trabajo de una década de miles víctimas, familiares, activistas y la comprometida colaboración del un amplio sector progresista del mundo de la cultura, que abrió una ventana de oportunidad mediática para la causa. En cierta medida fue políticamente patético constatar cómo las elites de los aparatos partidarios (PSOE-IU) y sindicales (CCOO y UGT) tenían que asumir un marco político tabú hasta meses antes (la impunidad del franquismo) y se apresuraban a dar cobertura “clandestina” a la organización de una manifestación con la que no querían parecer ligados (por su cuestionamiento implícito a los pactos transicionales)¹. Sin embargo sabían con plena conciencia que esta movilización gozaba del apoyo y simpatía de sus bases por lo que no era cauto mantenerse al margen de una reacción social contra lo que debería considerarse el mayor retroceso jurídico e institucional vivido por nuestra democracia y un claro triunfo de los sectores más retrógrados de la derecha.

¹ Para sopesar la situación de la movilización en España cabe subrayar que, los escasos recursos prestados se debía a que los sindicatos estaban embarcados en la movilización, una semana después, del día del Trabajo, 1º de Mayo, a la que asistieron menos de 6.000 personas. Datos en http://www.elpais.com/articulo/espana/habra/reforma/laboral/intensa/sea/genere/empleo/necesitamos/elpepuesp/20100501elpepunac_1/Tes http://www.elpais.com/fotografia/espana/Calculo/asistentes/elphotnac/20100425elpepunac_1/tes/



Neamp

En los debates sobre memoria e impunidad que se prorrogaron en los siguientes meses, podría decirse que empieza a perfilarse nítidamente una “gran coalición” argumental en la que convergen los historiadores “profesionales” con los “revisionistas”, hasta ayer enfrentados². Fue explícito cuando Pío Moa (2010) planteaba que Santós Juliá “va enterándose”, en el sentido de que había terminado aceptando las tesis defendidas por la llamada “brunete mediática”³. Se pueden resumir en dos: la equiparación de víctimas y responsabilidades entre los dos “bandos” –la violencia de los revolucionarios como los verdaderos responsables del fracaso de la República y la guerra- y en la defensa de la ejemplaridad de la Transición – vinculada en esta argumentación al papel de la llamada “generación del 56”, que según sus tesis produjo el único proyecto de democracia reconciliada posible-. Así pues, el académico ponderado situado en los parámetros ideológicos de centro-izquierda termina coincidiendo con el escritor que, sin escrúpulos, se dedica a remozar y repetir hasta la saturación los principales postulados franquistas, sin posibilidad de duda, una referencia de cabecera del neofascismo español que finalmente empieza a dar muestras de querer salir de protector útero del Partido Popular.

En este enconado debate pudimos constatar como personajes públicos muy reconocibles de trincheras hasta ahora opuestas (el grupo Prisa alineando sus principales articulistas, además del propio Santos Juliá, a Fernando Savater, Javier Pradera o Javier Cercas) coincidían con estas tesis básicas del citado Moa, y otros cómo grandes creadores de opinión como el radiofónico César Vidal o el director de El Mundo Jiménez Losantos (y decenas de periodistas multimedios replicantes) se unían para descargar su artillería sobre “vengativos” e “irresponsables” nietos. Llamaba particularmente la atención, la denuncia de su estrategia de “argentización” para convertir en “desaparecidos” (una figura jurídica) a nuestros “paseados” (metáfora elusiva del crimen utilizada durante el franquismo) (Pradera, 2010).

Unos y otros coinciden en que la agenda del movimiento por la memoria de derechos humanos -verdad, justicia y reparación- ponen en peligro nuestra democracia, a setenta y cinco años de distancia de la guerra, y a más de treinta años de haber finalizado la dictadura. En última instancia, como ya se planteó en la larga coalición política que, sobre este

² El cruce de acusaciones pivota sobre cuestiones metodológicas y de la pretendida neutralidad valorativa que quiere mantener el sector académico, encabezado por Santos Juliá, contra el revisionismo protagonizado entre otros, por Pío Moa. Éste último estuvo en su juventud vinculado a un oscuro grupo armado de extrema izquierda–GRAPO, actuante durante la transición y con inexplicables apariciones hasta la actualidad, sospechoso de mantener relaciones con las fuerzas policiales- es hoy ariete de la estrategia revisionista de la derecha/ultraderecha, con posiciones neofascistas. Como otros autores ultraderechistas, presentados así mismos como liberales de centro, llegan a vender centenares de miles de ejemplares de sus diversos libros justificadores del franquismo y negacionistas de su naturaleza criminal, exitosos dado que desarrollan actividad diaria como opinadores en radio, prensa y muchos de ellos también en televisión. Santos Juliá, afamado profesor universitario y columnista semanal desde hace décadas del prestigioso matutino El País, irritado por este debate, se posiciona como científico contra los creadores de opinión -un análisis exhaustivo de esta dinámica en Faber, Leon e Izquierdo (2010). Como Moa, ha mostrado una beligerancia sorprendente contra el movimiento de la memoria y sus demandas de justicia, y una defensa agresiva de la ejemplaridad de la transición democrática española.

³ Expresión que empezó a ser utilizada por el nacionalismo vasco ante la estrategia permanente de tensión mediática planteada por la prensa madrileña en relación a su agenda política, donde Brunete hace referencia a una cruenta batalla de la guerra civil y posterior localidad donde se alojaría la base de la división acorazada del ejército franquista creada en 1940. A día de hoy, en el contexto de cambio tecnológico a la televisión digital, la hegemonía televisiva de la derecha/ultraderecha ha sido ampliamente reforzada. Se hace evidente, sobre todo ante la desaparición de la cadena informativa CNN+ (del pretendidamente progresista grupo PRISA, cuya canal ha sido ocupada por el reality Gran Hermano, además de vender el Canal4, en abierto, al grupo Telecinco controlado por Berlusconi) la falta de proyecto mediático del campo progresista.



Neamp

particular, mantienen el PP y el PSOE. Ignoran toda discusión sobre la voluntad de justicia de este movimiento social y sobre su capacidad transformadora.

Mientras tanto, el sistema reglado de enseñanza obligatorio expande el silencio sobre este medio siglo traumático de historia española (República, guerra y franquismo). Cuando se preguntan por la atención que los profesores han prestado, por ejemplo a la guerra civil, en el colegio o instituto, contestan mucha/bastante un 21,4% frente al 69,3% de los encuestados que contestan poca/nada. Llama la atención que el 39.9 por ciento de los encuestados que está de acuerdo con que la II República instaurada en 1931 fue la primera experiencia democrática en España iguale al 39.4 que no lo sabe (frente al 16,1 que esta en desacuerdo)⁴. Estudiosos europeos y latinoamericanos que entran en contacto con nuestros estudiantes se sorprenden por el bajo nivel de información y sus actitudes intelectualmente elusivas sobre este capítulo clave de la historia universal moderna. La universidad tampoco ha cubierto esta laguna, ni el campo de la docencia ni el de la investigación.

En el ámbito historiográfico no hay acuerdo conclusivo sobre la idoneidad de los estudios sobre la represión franquista, en buena medida realizados por investigadores amateurs comprometidos con la memoria de sus familiares y el imaginario emancipador de las fuerzas que apoyaban a la República. Trabajosas investigaciones, con escasa ayuda o directamente al margen de las universidades –como se puso en evidencia el debate mantenido entre Santos Juliá (2006) y el historiador acusado de amateurismo, Francisco Espinosa (2006), en la revista *Hispania Nova-*, pero que con sus deficiencias fueron la base informativa sobre las desapariciones que las víctimas y sus familiares presentaron en la causa de la Audiencia Nacional. Tampoco en el campo de las ciencias sociales se ha desarrollado la trasdisciplinariedad necesaria para abordar las consecuencias traumáticas de la represión sistemática -mantenida hasta bien entrada la Transición- en sus diferentes vertientes psicosociales, políticas, culturales y filosóficas.

La *cultura de los derechos humanos* (centros y líneas de investigación, acceso a archivos, promoción de programas de formación en DDHH en los distintos niveles del sistema educativo) tampoco termina de permear nuestra universidad. Un informe de Amnistía Internacional arrojaba datos elocuentes en la revisión de 145 planes de estudios de 42 universidades públicas: ninguna asignatura obligatoria en las facultades de Derecho⁵. En el caso de la Complutense, donde decanos ultraconservadores han mantenido intocados los planes de estudios franquistas de 1953 hasta bien entrado el siglo XXI, he tenido la posibilidad de conversar con varios investigadores jóvenes especialistas en la materia –colaboradores del movimiento por la memoria-, que a pesar de su brillantez curricular internacionalmente reconocida, ven dificultado su concursos de acceso. En el caso de FCPS he realizado un repaso en la web de todos los programa de cualquier nivel de enseñanza (antiguas licenciaturas y doctorados, nuevos grados y masters) de sus cinco carreras (ciencias políticas, sociología, antropología, gestión pública y relaciones internacionales) existe

⁴ Estudio 2760, realizado en 2008 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (dependiente del Ministerio de Presidencia) para monitorar la opinión sobre la llamada “ley de memoria histórica”.

⁵ Presentado en 2008, el informe que compara varios países europeos, se titula “Las universidades españolas, a la cola de Europa en formación obligatoria en derechos humanos”. Se pronunciaban en la misma dirección respecto a la incorporación de los DDHH en la tan polémica asignatura de “educación para la ciudadanía” incorporada en el sistema de educación básica.

<http://www.es.amnesty.org/temas/educacion-en-derechos-humanos/noticias-relacionadas/articulo/un-paso-correcto-un-desarrollo-insuficiente/>



Neamp

ninguna asignatura que lleve en el título las palabras “DDHH”. Tampoco la palabra “memoria”, y no es por falta de demanda y público, como hemos podido comprobar en todas las actividades que venimos realizando como “extraacadémicas” desde hace muchos años junto con las asociaciones de memoria y el profesorado comprometido con la promoción de la memoria democrática y la denuncia del genocidio franquista.

En el caso de las ciencias políticas, la centralidad docente e investigadora que han mantenido las tesis consensuales sobre la Transición, han obstaculizado también el análisis de las inercias políticas, institucionales y culturales heredadas del franquismo que lastran y degradan nuestra vida democrática. Las dependencias partidarias entre los llamados especialistas académicos dificultan el abordaje crítico, el alumbramiento de marcos de debate dignos de tal nombre y la promoción de coaliciones propositivas para incidir en temas políticos centrales, como por ejemplo el sistema electoral - cuya lógica bipartidista violenta la pluralidad ideológica y la representación política de nuestro parlamento-, la interculturalidad necesaria para transformar la intocada idea de España y del sistema federal que supere los cuellos de botella del Estado Autonómico. Tampoco parece interesar académicamente la reforma de un sistema de justicia, que con la presencia de jueces (neo)franquistas mantienen graves bloqueos institucionales y vetan la aplicación del derecho internacional vigente también en España.

En el campo de la cultura política, los grandes “survey” internacionales comparados (cuantitativos) han sido utilizados para “demostrar” la rápida normalización democrática de la sociedad española –aunque sin poder ocultar los puestos de cola ocupados en relación a los indicadores participativos (afiliaciones partidarias, sindicales y asociativas en general; en participación no convencional en manifestaciones y otras expresiones de acción colectiva; en lectura de prensa e información política en general) y los puestos de cabeza en los relacionados con la desafección y desconfianza (hacia partidos, instituciones) y de impotencia política (creencia en poder incidir políticamente). Llama la atención el escaso uso de metodologías cualitativas para analizar lo que, en su momento, la escuela de Frankfurt problematizó como cultura autoritaria, con tres generaciones culturalmente forjadas en un estado totalitario. En los estudios de bienestar y política social puede decirse que hasta que el profesor exilado Vicenç Navarro a mediados de los noventa a Barcelona, no tuvimos ninguna voz universitaria con capacidad de denunciar en la esfera pública el retraso social y laboral español, y menos que lo hubiese vinculado a nuestro pasado como hizo constantemente desde 2002 con la publicación de *Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta*, libro fundamental con indicativo subtítulo de *De lo que no se habla en nuestro país*. En última instancia, hablamos de una agenda docente e investigadora alejada de temas centrales de la actualidad política.

3. Memoria y perspectiva crítica generacional.

La FCPS es un interesante espacio para observar la oscilación de la politización de los diferentes sectores ideológicos y generaciones que se agrupan en sus distintas carreras. Antes se comentó un proceso de derechización de un profesorado que hunde la raíz de su imaginario político en los pactos transcionales, se agravó por la crisis (de agenda nacional y transnacional) de la izquierda en los noventa tras la caída del muro berlinés y que ha culminado con buena parte de la “generación del 68” (protagonista de la Transición en mayoría de edad) abiertamente derechizada, incluso ingresando en las filas neoconservadoras tan bien financiadas-.



Neamp

Comparándose con otros países europeos, se pudo constatar la parálisis intelectual y la inacción de la universidad con la significativa incomparecencia de la gran mayoría del profesorado durante la profunda reforma universitaria impulsado en el marco de la Unión Europea (el llamado “proyecto Bolonia”), con una clara estrategia de mercantilización del conocimiento y segmentación de las universidades públicas bajos los criterios de excelencia académica. También frente a la coyuntura de crisis financiera que atravesamos, donde puedo asegurar que en la FCPS no se ha realizado un acto académico de mínima envergadura y visibilidad para analizar un proceso histórico que abre un amplio campo de incertidumbre. Cuestión que también se tiene que explicar por la edad media del profesorado –entre los más de 300 profesores, los menores de 35 años se cuentan con los dedos de la mano- y el “efecto laminación” que en términos de valores y orientaciones ha tenido la “generación del 68” sobre la siguiente (Monedero, 1999) -la mía, de los profesores entre 40 y 55 años, mayoritariamente hoy cínicos políticos-⁶.

Una ilustración llamativa de esta falta de implicación en un tema de tan actualidad informativa como es el de la memoria y los derechos humanos en el contexto de crisis generado por Garzón en la Audiencia Nacional –con noticias, prácticamente, diarias en la prensa de referencia- lo podemos sacar de dos de las publicaciones que se realizan en la FCPS. El número anual de de la revista *Antropología Social* (vol. 19), elaborada en el Departamento del mismo nombre, está dedicada a “Antropología y derechos humanos”, donde solo uno de 12 artículos está dedicado a la problemática hoy existente en España, y es Francisco Ferrandiz (2010), investigador sumamente comprometido con el movimiento memorialista, pero que desarrolla su trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas –es decir, ningún profesor de la facultad aborda la problemática-. *Política y Sociedad*, revista de la Facultad, en uno de sus números de 2010 contiene un monográfico dedicado a “La identidad y la ciudadanía en las instituciones educativas” con nueve artículos, ninguno problematiza la cuestión de la memoria y la ciudadanía –a pesar de que en uno de ellos se denuncian los modelos pasivos y autoritarios de enseñanza, y el autor se queja del peso presupuestario que tiene la enseñanza religiosa “concertada”, aunque no explica que se llama así por estar obligada por los elitistas, insanos y costosísimos Concierdos con el Estado Vaticano firmados furtivamente en 1979 por las elites franquistas y con las opositoras mirando hacia otro lado, hasta hoy mantenidos a pesar de haber contado ya con más de dos décadas de gobiernos socialistas-. Aunque parezca sarcástico en el monográfico se incluye un artículo titulado “La educación de la memoria en la formación del ciudadano: el caso del currículum greco-chipriota”.

Mientras, en el estudiantado que entra en primera opción en esta facultad, existe una selección “vocacional” de los previamente politizados, sea en perspectivas contestarias o “integradas”, dependiendo fundamentalmente de la socialización y trayectoria intelectual y política familiar, pero mayoritariamente todas en el campo progresista. En este sector se conserva una tradición crítica, consolidada en una minoría consistente de alumnos de izquierda, que logran la mayoría de la representación en Junta de Facultad, sin contabilizar un considerable sector

⁶ En el citado estudio una pregunta sobre los “silencios familiares” presta pistas para la indagación intergeneracional interesantes: sólo el 26,8% de los entrevistados dicen haber hablado mucho/bastante en su hogar sobre la guerra civil, frente al 69,6% que dicen haberlo hecho poco/nada. Pero cruzados por edad, entre la horquilla superior e inferior de lo que sería la “generación protagonista de la transición”, donde ponemos la imagen de los “hermanos mayores” y los “hermanos menores” se puede observar porcentajes de diferencia de más del 10%, indicativo de cómo la repolitización de esa generación se cierra abruptamente, incluso en las familias, tras el año constitucional de 1978.



Neamp

autogestionario que no participa de la vida institucional, pero de amplia presencia cultural en el centro y en los tejidos juveniles madrileños (movimiento antiglobalización, ecologistas, casas ocupadas, ciberactivismo, etc).

En este sentido es patente el cierre sobre las nuevas sensibilidades públicas vinculadas a la renovada agenda de trabajo que, no sin dificultades, promueven los movimientos sociales. La falta de cultura de diálogo y deliberación permite constatar un gradual desencuentro generacional en torno a la interpretación de viejas y nuevas dinámicas políticas, sociales y tecnológicas. Se podrían ilustrar con decenas de ejemplos cotidianos, de los que apuntamos brevemente algunos que hemos vivido en carne propia los escasos miembros de un colectivo de profesores e investigadores (la Promotora de Pensamiento Crítico).

- Tras el episodio del juez Garzón, los varios intentos de abordar la calidad de la democracia española o revisar los postulados de la Transición treinta años después han fracasado por incomparecencia de los más significativos profesores que la teorizaron y mucho de los cuales siguen reafirmando sus consensos en sus columnas habituales en los grandes medios. A pesar de un acercamiento cuidado y respetuoso, dispuesto incluso a negociar las condiciones del debate y de los invitados, rechazaron participar en los diversos encuentros (una de las personas a la cual aprecio personalmente, me dijo textualmente “el cuerpo no me pide hablar de estas cuestiones”). Estamos considerando para próximas iniciativas hacer público el listado de profesores que rechazan la invitación y eluden abiertamente un debate a todas luces necesario.

- Desde estos mismos espacios académicos e ideológicos se han censurado los actos que hemos realizado sobre los procesos políticos impulsados por los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina, con incontestables contenidos progresistas y de gran interés para los alumnos –la presencia de los únicos jefes de estado que han pisado la facultad, los presidentes Chávez, Morales y Correa, y también del profesor Imanuel Wallerstein han sido los únicos actos que han llenado con más de 600 personas nuestro infrautilizado “salón polivalente”. Compartiendo los marcos estigmatizadores manejados por los media hegemónicos, hemos sido calificados por buena parte del profesorado de “peligrosos bolivarianos” y “antidemócratas”.

- Con el caso de Joan Garcés se constata la continuidad del cierre al pensamiento crítico nacional⁷. Su libro *Soberanos e Intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles* (prologado por Mario Benedetti en 1996, y reeditado en 2000 y 2008), ignorado activamente en programas departamentales, no ha podido ser presentado en la FCPS al no contar con ningún apoyo en el profesorado. Esta investigación histórica de archivos oficiales europeos y de Estados Unidos sigue siendo fundamental para entender la trama de intereses geopolíticos y sus articulaciones políticas y económicas nacionales en las que descansó el golpe de 1936, el franquismo, la Transición y nuestra incorporación subalterna a la Europa comunitaria y la política atlantista. Quince años después de su publicación esperamos poder en breve conocer la vigencia de sus tesis, terriblemente ilustradas con el ataque de de los mercados financieros europeos a nuestra economía.

⁷ Joan E. Garcés abogado, doctor en ciencias políticas, jurista y profesor de relaciones internacionales de reconocido prestigio internacional (Premio Nobel Alternativo, 1999; Officier de l'Ordre Nationale du Mérite concedido por el Presidente de la República francesa, 2001), asesoró en la presidencia de Salvador Allende y a Francios Mitterrand; actualmente lleva la causa de la nieta de Juan Negrin, último presidente socialista (PSOE) de la II República, ante la justicia española.



Neamp

- Un capítulo aparte merecería las medidas tomadas por el rector Carlos Berzosa en el campo de la memoria, sobre el que cabría hacer balance ponderado y constructivo. En primer lugar, rescatar que ha sido el primer rector en democracia que ha homenajeado a los profesores republicanos represaliados, con actos y la publicación de un libro en el año 2006. No obstante, desde el punto de vista de la renovación generacional y cultural no podemos dejar de señalar una actuación tímida en la limpieza de los símbolos franquistas hoy presentes en el campus. Al igual que el presidente Zapatero con la retirada de la estatua ecuestre del dictador que quedaba en el complejo de los Nuevos Ministerios, la retirada del yugo y las flechas falangistas de la fachada del edificio de Rectorado se hizo a escondidas. Y bien hubiese merecido un acto público de dignidad democrática y un discurso solemne que acompañase este proceso de reflexión colectiva hacia el interior de la universidad. Sobre todo, después de la ley de memoria de 2007, que ya obliga a las administraciones a cambiar callejeros e intervenir símbolos franquistas; así como la mencionada avenida del ministro franquista Juan Ibáñez Martín, las tímidas gestiones para el cambio de denominación e intervención en el llamado “Arco de Triunfo” (enorme mole al estilo romano-fascista, que celebra la victoria sobre la República en sede universitaria) demandado por el movimiento de memoria, bien merecería mayor implicación de la comunidad universitaria.

-Por último, cabe señalar algunas cuestiones sobre la participación de los estudiantes dentro y fuera del aula. Es un comentario común, sobre todo en los cursos superiores y el posgrado, la intensidad de la participación de los alumnos extranjeros (particularmente los latinoamericanos, aunque también los europeos pese a sus deficiencias idiomáticas). Lo que no deja de ser indicativo de la falta de cultura participativa con la que los estudiantes llegan a la universidad, con serias limitaciones para expresar públicamente sus ideas. En una encuesta que la Promotora realizó junto a estudiantes para evaluar, entre otras cuestiones, los mandatos de innovación pedagógica exigidos por Bolonia, nos sorprendió la inclusión por parte de los estudiantes de una pregunta: “¿has tenido profesores que humillan a los alumnos en clase?” (con un 30% de respuesta afirmativa)⁸. Cuestión sumamente preocupante en pleno siglo XXI en el tan publicitado Espacio Europeo de Enseñanza Superior, más si tenemos en cuenta que quien la formulaba ha sido un alumno brillante que consiguió uno de los dos premios anuales que se dan a los mejores expedientes de cada promoción. Como Vicedecano de Estudiantes he tenido que realizar una mediación en un conflicto docente en una asignatura vinculada a prácticas democráticas - donde la discusión con el docente pretendió ser zanjada a gritos “aquí la autoridad soy yo” y “que me vas a decir tú de democracia, que llevo décadas metido en esto” –y donde los escritos presentados por el alumno se apoyaban en las tesis pedagógicas de Paulo Freire para justificar su posición-.

Fuera del aula, los abucheos de los estudiantes a políticos invitados neoconservadores –que juegan peligrosamente con estridentes discursos identitarios- ha podido llegar a la prensa y ser acusados por algún profesor “columnista” como de “fascismo rojo” y “filoterroristas”, merecedores de la mano más dura por parte de las autoridades académicas y policiales –más allá de que pueda considerarse una estrategia de expresión estudiantil que se remonta a los orígenes de la universidad. Esta enérgica condena de la pasión política del estudiantado contrasta con la gestión de su propia pasión micropolítica por el poder académico, donde pueden llegar en sus acaloradas oposiciones a plazas universitarias, a propinar golpes a colegas miembro oficiales de esos tribunales universitarios –ya sin comentar los constantes

⁸ Esta investigación realizada por alumnos con la ayuda de algunos profesores, que fue contestada por más de 900 alumnos de entrono a 4.000 de la FCPS, será publicada en breve como documento de trabajo y sus datos presentados en Junta de Facultad.



Neamp

casos de endogamia, donde los candidatos internos dejan fuera afuera trayectorias investigadoras que hacen pasar vergüenza a la sala allí presente en “ejercicios públicos”⁹.

Las disputas por la memoria implican poder contar con los distintos grupos sociales, saber qué significa para ellos el pasado y en qué medida se relaciona con su presente y futuro. Una sociedad democrática está abocada a integrar constantemente en nuevas narrativas esta diversidad de voces, cuyo fin último es recrear la comunidad política de referencia.

Evidentemente implica renovación de discursos y reacomodos institucionales difíciles para algunas biografías que, renunciado a la crítica y colmadas de autocomplacencia, se pretenden progresistas. Cuando lo que en última instancia pretenden es una suerte de impunidad discursiva en el ámbito universitario, que les permita continuar eludiendo constantemente la crítica deliberativa para mantener su poder institucional.

La lucha por la memoria y contra la impunidad ha sido un vector clave del pensamiento democrático y republicano moderno, que defiende el imperio de la ley -y la igualdad ante ésta- como forma de frenar los abusos de los más fuertes, del gobierno y de las mayorías cuando se vuelven prepotentes. En una coyuntura de crisis como la que atravesamos, donde los poderosos no tienen escrúpulos en volver a explotar el miedo al otro y las identidades esencialistas, es si cabe más necesario reclamar a la universidad su papel intelectualmente crítico y políticamente contenedor. Sin duda, la lucha contra la impunidad del fascismo ha estado marcada históricamente por la correlación de fuerzas en los tableros políticos e ideológicos. Pero hoy la cultura de los derechos humanos nos da herramientas con clara racionalidad jurídica para un nuevo pacto político-cultural del cual sería dramático que la universidad española pretendiera seguir estando al margen.

Bibliografía (links revisados 3/1/2011)

Alvarez Cobelas, J. (2004), *Envenenados en cuerpo y alma. La oposición al franquismo (1939-1970)*, Madrid: Siglo XXI

Carreras Ares, J.J y Ruiz Carnicer, M.A. (1991) (eds.) *La Universidad española bajo el régimen de Franco*, Zaragoza: Institución Fernando el Católico

Chirbes, R. (2005) “De qué memoria hablamos?”, en Carme Molinero (ed.) *La Transición, treinta años después*, Barcelona: Península

Garcés, J (1996) *Soberanos e Intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid: Siglo XXI

Claret Miranda, J. (2006), *El atroz desmoche. La destrucción de la Universidad española por el franquismo (1936-1945)*, Barcelona: Crítica

Elorza, A (2008) “Fascismo Rojo”, *El País*, 23/2/2008,
http://www.elpais.com/articulo/espana/Fascismo/rojo/elpepiesp/20080223elpepinac_26/Tes

⁹ Lo que nos llevo a diversos profesores a tener varias intervenciones cruzadas en prensa: Elorza (2008); Jerez (2008); Jerez, Descansa e Iglesias (2009)



Neamp

Faber, S. Leon, P. e Izquierdo, J. (2010). “¿De quien es el poder de contar? A propósito de las polémicas públicas sobre memoria histórica”, *Viento Sur*, nº113

Ferrandiz, F. (2010) “De las fosas comunes a los derechos humanos: El descubrimiento de las desapariciones forzadas en la España contemporánea”, *Revista de Antropología Social*, vol.19.

Gallego, Ferrán (2008) *El mito de la transición: la crisis del franquismo y los orígenes de la democracia (1973-1977)* Barcelona: Crítica.

Lain Entralgo, P. (1976), *Descargo de Conciencia*, Barcelona: Barral

Jerez, A.; Descansa, C. e Iglesias, P. (2009) “Esfera publica y universidad”, *Público*, 2/5/2009 <http://blogs.publico.es/dominiopublico/1252/esfera-publica-y-universidad/>

Jerez, A. (2008) “Abucheos universitarios y esfera pública”, *Público*, 29/2/2008 <http://blogs.publico.es/dominiopublico/349/abucheos-universitarios-y-esfera-publica/>

Moa, P (2010) “Santos Juliá va enterándose”, *Libertad Digital*, 28/06/2010 <http://www.libertaddigital.com/opinion/pio-moa/santos-julia-va-enterandose-55404/>

Monedero, J.C. (1999) “El misterio de la transición embrujada (un collage generacional sobre la transición española)”, en Monedero y Paniagua (eds.) *En torno a la democracia en España: temas abiertos del sistema político español*, Madrid: Tecnos

Navarro, Vicenç (2002) *Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se habla en nuestro país*, Barcelona: Anagrama.

Navarro (2009) “Las derechas españolas y el fascismo”, *Le Monde Diplomatique*, edición española, Julio.

Pradera, J. (2010) “Paseos y tumbas”, 10/01/2010, *El País* http://www.elpais.com/articulo/opinion/Paseos/tumbas/elpepusocdgm/20100110elpdmgpan_5/Tes

Ruiz-Huerta Carbonell, A. (2009) *Los ángulos ciegos: una perspectiva crítica de la transición española, 1976-1979* Madrid: Biblioteca Nueva; Fundación José Ortega y Gasset.

Ruiz Carnicer, M.A. (1996), *El Sindicato Español Universitario (SEU) 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo*, Madrid: Siglo XXI

Sánchez Soler, M. (2010) *La transición sangrienta : una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983)*, Barcelona: Península

Otero Carvajal, L. (2001), “La destrucción de la ciencia en España. Las consecuencias del triunfo militar de la España franquista”, *Historia y Comunicación social*, nº6

Otero Carvajal, L (2006) (dir.), *La destrucción de la ciencia en España. Depuración Universitaria en el franquismo*, Madrid: Ed.Complutense.

Ugarte, J. (2005) “¿Legado del franquismo? Tiempo de contar”, en Carme Molinero (ed.) *La Transición, treinta años después*, Barcelona: Península

VVAA (2006) (dir.), *La destrucción de la ciencia en España. Depuración de la Universidad de Madrid en el franquismo (libro exposición)*, Madrid: Ed.Complutense.